



Consejo Económico  
y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/AC.4/1998/9  
24 de junio de 1998

ESPAÑOL  
Original: ESPAÑOL/INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones  
y Protección a las Minorías  
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas  
16° período de sesiones  
27 a 31 de julio de 1998  
Tema 7 del programa provisional

ACTIVIDADES NORMATIVAS

Nota de la Secretaría

Información recibida de organizaciones indígenas

1. En su resolución 1982/34, de 7 de mayo de 1982, el Consejo Económico y Social autorizó a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a establecer anualmente un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas encargado de examinar los acontecimientos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, incluida la información solicitada por el Secretario General anualmente, y de prestar especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas.
2. En su resolución 1997/14, de 22 de agosto de 1997, la Subcomisión pidió al Secretario General que transmitiera el informe del Grupo de Trabajo a las organizaciones intergubernamentales indígenas y no gubernamentales y que las invitara a que proporcionaran información y datos. En su resolución 1998/13, de 9 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos instó al Grupo de Trabajo a que continuara su examen a fondo de los acontecimientos. El presente documento contiene información en relación con el tema 7 del programa provisional.

MOVIMIENTO INDIO "TÚPAC AMARU"

[Original: español]  
[25 de mayo de 1998]

LA LIBRE DETERMINACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS EN EL  
MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL

I. Lucha indígena por su autodeterminación

1. El concepto del derecho a la libre determinación de los pueblos y naciones es una cuestión tan vieja en el tiempo y en el espacio y, sin duda, la más controvertida de toda la historia de la lucha entre vencidos y vencedores.
2. En abierto reto a la evolución ascendente de la historia social y política y, en contradicción con los instrumentos internacionales, los Estados siguen negando el justo reconocimiento a los pueblos indígenas de su derecho consuetudinario a la libre determinación. Transcurridos más de 500 años desde el descubrimiento del "Nuevo Mundo y el Encuentro de dos Culturas", la cultura occidental continúa imponiendo a los aborígenes su visión del mundo, su modelo de producción y consumo y sus conceptos políticos como valores intangibles.
3. A la luz de la interpretación objetiva del derecho consuetudinario basado en la práctica ancestral, la libre determinación de hecho y de derecho pertenece a los pueblos desde tiempos inmemoriales y nunca ha sido propiedad de los Estados. Si realmente este concepto es universal, indivisible e interdependiente en el devenir del hombre y la sociedad, no vemos la razón de que deba ser objeto de regateo mercantil como en la bolsa de valores.
4. En la pura concepción de la democracia y justicia social, los Estados no deberían sino reconocer explícitamente este derecho legítimo e inalienable, sin restricción ni condiciones, reglamentar su funcionamiento y garantizar su pleno ejercicio, de conformidad con las normas e instrumentos internacionales en vigencia.
5. A propósito, en su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, titulada "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales", la Asamblea General de las Naciones Unidas por fin reconoció el derecho a la libre determinación de todos los pueblos como uno de los principios fundamentales del derecho internacional público. En virtud de este derecho inalienable los pueblos colonizados y dependientes adquieren la potestad para determinar libremente su condición política, proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural y disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En substancia, como se ha reiterado, se trata de un requisito básico para el goce efectivo de cualquier otro derecho y libertad fundamental.

6. Quien afirma que este derecho se terminó con la concesión de la independencia a los países coloniales, es porque no concibe el derecho de autodeterminación en permanente evolución. De conformidad con un análisis objetivo y coherente con la evolución de las normas internacionales, este derecho inalienable se aplica naturalmente sin objeción ni reserva a los pueblos indígenas.

7. Sin duda, el instrumento de alcance universal es la Carta de las Naciones Unidas que, en sus artículos 1, 2 y 55 establece la necesidad de "fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos".

8. Desde el punto de vista histórico, social, político y moral, el derecho de autodeterminarse como entidades políticas y sociales forma la base espiritual del derecho internacional contemporáneo que, por su esencia y su naturaleza, concibe la sociedad en permanente mutación hacia la convivencia pacífica; pero condena y rechaza toda injerencia en los asuntos internos de otros países bajo el manto del "derecho internacional humanitario".

9. Teniendo presente dichos principios universalmente reconocidos por la comunidad internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo primero estipula: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural".

10. A los efectos de esta disposición, los instrumentos citados no sólo confieren a los pueblos el derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sino urgen a los Estados a cumplir con sus obligaciones contraídas en la promoción y respeto del ejercicio efectivo de la libre determinación, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

## II. Interpretación subjetiva del concepto de libre determinación

11. A lo largo de más de una década hemos observado que, las Potencias occidentales del norte, así como las elites dominantes del sur tratan de dilatar el examen y adopción de la Declaración, diluir el proyecto en general, debilitar la fuerza jurídica de sus disposiciones en particular y, de esa manera postergar indefinidamente los derechos de los pueblos indígenas. Sus argumentos repetidos en los foros de las Naciones Unidas desde hace 15 años, en sentido de que la autodeterminación unilateral de las naciones aborígenes, provocaría la disgregación del Estado nacional y amenazaría a su soberanía y su integridad, sin duda carecen de fundamento jurídico y no tienen justificación moral.

12. En los umbrales del siglo XXI, a nadie se le ocurrirá imaginar que las poblaciones aborígenes, quizás en vías de extinción como los yanomanis en Brasil, los indios de Chiapas combatidos por las armas modernas, así como los primeros habitantes de los Estados Unidos de América predestinados a

sobrevivir en "reservas" y los pueblos aborígenes del norte de Siberia condenados a un lento genocidio pueden constituir una amenaza para la soberanía de las potencias económicas y militares.

13. La pesadilla del fantasma de la pretendida escisión o secesión, el temor imaginario susceptible de socavar la razón del Estado o la supuesta amenaza a la integridad territorial se desprende una y otra vez de una interpretación subjetiva y tendenciosa del concepto de la libre determinación.

14. Los Estados olvidan deliberadamente otro aspecto de la resolución 1514 (XV) adoptada por la Asamblea General en 1960, resolución que no sólo pone fin al colonialismo, sino que tiende a salvaguardar la soberanía nacional. En su párrafo 6 estipula que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

15. No obstante esta disposición clara y precisa en materia de integridad nacional, Gobiernos como los de los Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y otros se libran a interpretaciones erróneas con la intención deliberada de dividir el concepto de la libre determinación en derecho interno y derecho externo. El primero se aplicaría a los indígenas considerados como minorías, etnias, es decir subnaciones o grupos de segunda categoría; mientras el segundo ampara a la nación dominante y opresora, es decir a las elites del Norte y del Sur que detentan el poder político y económico.

16. A los efectos de esta clasificación arbitraria e inexistente en los manuales de derecho internacional, los aborígenes y nativos no son reconocidos como pueblos ni sujetos de derecho y, por ende no tendrían la plena potestad para disfrutar del derecho a la libre determinación en su integridad. Para todo jurista sensato, el concepto de la libre determinación es intrínseco, inalienable, indivisible y universal tanto en su interpretación como en su aplicación práctica. La Declaración Universal adoptada hace 50 años no tendría el carácter universal, si otras naciones están discriminadas y excluidas del ejercicio de autodeterminación.

17. Estas alegaciones de connotación racista llaman a otra reflexión pertinente. Los hechos tenaces nos demuestran que la real amenaza contra la integridad y la soberanía nacional no viene de los pueblos vencidos y colonizados, sino de las antiguas y nuevas metrópolis del Norte y de las elites del Sur. ¿De qué se trata en el fondo? Detrás de la negación sistemática a los pueblos indígenas de restituir el derecho a determinar libremente su propio destino, se oculta la razón económica, es decir los grandes intereses económicos y estratégicos de las Potencias económicas y militares de Occidente.

18. En violación de la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962 que reafirma el derecho de los pueblos a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, las corporaciones transnacionales a partir de sus sedes matrices o centros

de decisión en las Potencias occidentales codician las fabulosas riquezas básicas, tales como el petróleo, gas natural, oro, plata, uranio, diamantes, etc., dormidas en tierras y territorios indígenas.

19. ¡Qué ironía! los Gobiernos de América Latina pretenden aparecer como defensores de la soberanía nacional, cuando son ellos, en aplicación de sus políticas ultraliberales que practican la entrega incondicional de recursos naturales a la voracidad del capital financiero internacional. Entonces ¿quién atenta contra qué y quién amenaza a la soberanía y la independencia del Estado nacional?

20. En un Estado de derecho, lo más lógico y razonable sería concebir el concepto de la libre determinación indígena en la dialéctica permanente, introduciéndolo como una nueva categoría del derecho internacional contemporáneo. Al introducir en sus constituciones y legislaciones nacionales nuevos conceptos y categorías jurídicas, tales como la libre autodeterminación, el concepto de pueblos indígenas, el derecho colectivo a la tierra y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, etc., con el propósito de enriquecer la diversidad plurinacional y pluricultural, sin ambiciones paternalistas ni con intenciones de asimilación de la identidad india a la civilización occidental, los Estados podrían reparar una injusticia secular en el más elevado sentido de responsabilidad.

### III. Falta de voluntad política

21. Pero la experiencia ha demostrado la falta de voluntad política para resolver los problemas angustiosos de los pueblos indígenas en el mundo. Quince años después de haberse iniciado la redacción de la Declaración sobre los derechos de las poblaciones, el proyecto revisado está afrontando los retos del hombre y del tiempo y se vacía cada vez más su contenido político y jurídico, se debilita y se reduce en declaraciones obsoletas y abstractas.

22. No es una simple casualidad que la disposición relativa a la libre determinación haya sido relegada del primer al tercer lugar de la parte dispositiva de la Declaración. Es el resultado de las presiones políticas y maniobras diplomáticas de los Estados que pretenden minimizar su alcance jurídico y quitarle la importancia política de un derecho inalienable, indivisible y natural con el propósito de postergar indefinidamente los derechos indígenas.

23. Téngase bien claro que el derecho a la libre determinación en la forma en que se define en el artículo 3 del proyecto de declaración, responde a una de las aspiraciones legítimas en la medida en que dispone una mayor autonomía de régimen interno, en el sentido de autogobierno y autoadministración de sus propios detenidos, sin la menor intención de crear miniestados en los propios Estados nacionales como suelen falsificarlo los detractores del principio, según el cual cada pueblo debería determinar libremente su propio destino.

24. A los efectos jurídicos de esta disposición, por autonomía administrativa en asuntos locales se entiende la potestad de poblaciones y comunidades

originarias que, dentro del Estado nacional, gozarían del derecho a la gestión y usufructo de sus tierras y recursos naturales y la promoción de los valores culturales, en particular el fomento de la educación, la protección del medio ambiente, la salud, la vivienda, el empleo y el bienestar social, mediante órganos de autogobierno propio.

25. Bien entendido, el ejercicio efectivo de esta autonomía debería otorgar plenas facultades desde los ayllus (comunidad campesina) pasando por las comunidades originarias hasta las naciones a gobernarse por sus propias leyes, determinar libremente las formas y condiciones de su propio desarrollo y asumir sus deberes con la comunidad nacional, en tanto que actores de la vida política y sujetos de derecho.

26. En vísperas del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda política encaminada a quebrantar la voluntad de los pueblos sojuzgados de asumir sus propios destinos con dignidad y en pie de igualdad, debería considerarse como un acto irracional, una medida injusta, discriminatoria y, por ende incompatible con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales.

27. Porque el proyecto de la declaración descansa en el principio de la libre determinación y forma su columna vertebral. Esto implica que la adopción de la declaración por la Asamblea General en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo es una condición esencial para la supervivencia de las poblaciones aborígenes y la preservación de su identidad.

28. No se trata simplemente de reconocer una identidad en sí, sino de una identidad para sí, es decir, considerar al indio como un actor de la historia y sujeto de derecho. Entonces, al amparo del principio de autodeterminación, los pueblos indígenas serán entidades políticas y socioeconómicas dotadas de plenas facultades para participar en la vida nacional y en el concierto internacional.

29. Si los Estados Partes en los convenios, pactos internacionales y declaraciones no asumen su responsabilidad política en la aplicación de estos derechos inalienables inherentes a todas las naciones, sin discriminación, que han sucumbido a otro régimen neocolonial, se asistirá al despertar de diferentes formas de lucha en el mundo, desembocando en un vasto movimiento de convulsión social por la vida y la dignidad, la tierra y la soberanía, de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales.

-----